

**SOCIEDADES LOCALES BAJO RIESGOS GLOBALES:
OBSERVACIONES DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES**

Carlos Haefner
Daniel Camarena

Coordinadores

D.R. © Ediciones del Lirio, SA de CV
Azucenas 10, San Juan Xalpa, Iztapalapa
Ciudad de México, C.P. 09850
< <https://edicionesdellirio.com.mx/> >

Cuidado de la edición: Sigfrido Bañuelos
Diseño editorial: Miguel Ángel Reyes Fernández
Diseño de forros: Ana Patricia Reyes Fernández

ISBN:

Hecho en México
Made in Mexico

Índice

Presentación <i>Carlos Haefner y Daniel Camarena</i>	7
Prólogo <i>Jorge Ignacio Peña González</i>	9
El difícil tránsito de lo probable a lo posible. De la educación formativa al desarrollo durable (propuestas para México) <i>Tomás Miklos</i>	17
La ciudad como producto de la modernidad: vidas precarias y desigualdades sociales en la era global, visiones desde Tepic <i>José Salvador Zepeda López y Marco Alanéz Olvera Morales</i>	69
Sociedad y fundamentos del <i>compliance</i> : dimensiones instrumental y expresiva de la normativa <i>Manuel Letzkus</i>	87
Las universidades públicas, más allá de la posmodernidad <i>Salvador Mancillas y Enedina Heredia</i>	105
Sospechas globales desencadenando incertidumbres locales <i>Pedro Jesús Maquera Luque</i>	131
Pobrezas y desigualdades en México. Consecuencias inadvertidas del proceso de modernización del Estado <i>José Luis Pacheco Reyes, Alejandro Enrique Orozco Morales</i> <i>y Daniel Antonio Camarena Barrón</i>	143
Riesgo global y sociedades desiguales. Escenarios en tiempos de incertidumbre <i>Carlos Haefner Velásquez y Édgar Jiménez Cabrera</i>	169
Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de las privatizaciones. Balance del cambio y continuidad en las asociaciones público-privadas bajo el gobierno de izquierda en México (2018-2021) <i>Alberto Espejel Espinoza y Mariela Díaz Sandoval</i>	189

Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de las privatizaciones. Balance del cambio y continuidad en las asociaciones público-privadas bajo el gobierno de izquierda en México (2018-2021)

Alberto Espejel Espinoza¹
Mariela Díaz Sandoval²

Resumen

El objetivo de este artículo fue reflexionar sobre la política en torno a las privatizaciones en el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Se pretendió identificar el sello ideacional y las posibles rupturas o continuidades de la política de infraestructura en un contexto global caracterizado por la promoción e impulso de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) —como una modalidad de la privatización de bienes y servicios públicos. Se sostiene que las ideas en torno a la rectoría del Estado en la actual administración sancionan negativamente la participación del sector privado en los sectores carcelario y hospitalario, deteniendo, en cierta medida, la inercia privatizadora impulsada desde la década de los ochenta. Se concluye que, a pesar de su abierta oposición, el gobierno de Amlo ha tenido que valerse de las APPs en sectores como el carretero y el transporte, debido a las restricciones presupuestales que se verán agravadas con fenómenos como la pandemia provocada por el Covid-19.

Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador (Amlo), Asociaciones Público-Privadas, ideas, política partidista, privatizaciones.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the politics around privatizations in the left-wing government of Andrés Manuel López Obrador (Amlo). The aim is to identify the ideational mark and the possible breaks or continuities of the infrastructure policy in a global context characterized by the promotion of the Public-Private Partnerships (PPPs) -as a modality of the privatization of public goods and services-. It is argued that the ideas around the State in the current administration do not approve the participation of the private sector in the prison, and hospital sectors, freezing, to some

¹ Profesor Investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ciencia Política por la Unam. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Dirección: Avenida Alcanfores y San Juan, Totoltepec s/n, Sta Cruz Acatlán, 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Correo: <alberto.espejel.espinoza@gmail.com>.

² Profesora Investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Dirección Av. del Espanto núm. 50, Hornos Insurgentes, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Correo: <diazsandovalmariela@gmail.com>.

extent, the privatization inertia promoted since the 1980s. We concluded that despite its open opposition, the Amlo government has had to use PPPs in sectors such as road, energy infrastructure, and transport, due to budget restrictions that will be aggravated by the Covid-19 pandemic.

Keywords: Andrés Manuel López Obrador (Amlo), Public-Private Partnerships, ideas, partisan politics, privatizations.

Introducción

La actual coyuntura provocada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha dado lugar, aunque con distinta intensidad, a un conjunto de desafíos para los gobiernos en todos los rincones del planeta. Esta emergencia sanitaria es solo un reflejo de las consecuencias no deseadas en las sociedades altamente complejas, donde la degradación ambiental y la explotación desmesurada de los recursos naturales –como actividades sustanciales para generar crecimiento económico– son consideradas su causa principal (Ceballos, 2020; Díaz, 2020; Suárez et al., 2020). Si bien el propósito de este capítulo no es abordar la respuesta de los gobiernos y las consecuencias ante el Covid-19, sí nos permite introducir sobre la necesidad de identificar la compleja relación entre escenarios locales y globales en sociedades caracterizadas por altos niveles de contingencia –que en palabras de Luhmann (1996) es entendida como todo lo que no es necesario ni es imposible, aquello que puede ser como es, o puede ser de otro modo.

Sin embargo, aunque las fuerzas globales, sean económicas, sociales, políticas o ambientales, imponen desafíos a los gobiernos nacionales, es posible identificar resistencias o agencia de actores de distinta naturaleza en el ámbito nacional y local, donde la dimensión ideacional adquiere un importante papel. En este sentido, la llegada de gobiernos de izquierda en América Latina en la primera década del siglo xx significó un suceso relevante, después del impulso de las políticas neoliberales en la recta final de la década de los setenta. Para el caso de México, fue hasta 2018 cuando se concretó el triunfo de un gobierno de izquierda, encabezado por el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Su llegada al Ejecutivo Federal, luego de más de 30 años de trayectoria política en organizaciones partidistas de izquierda, generó grandes expectativas en torno a los posibles cambios que podrían implementarse en las distintas áreas de la acción gubernamental. En particular, llamó la atención su discurso en contra de la corrupción y las privatizaciones, mismo que, a poco más de dos años desde su llegada al Poder Ejecutivo, ha tenido efectos llamativos en las contrataciones y adjudicaciones de proyectos de infraestructura y servicios a actores privados. No obstante, como resulta obvio, la participación privada se ha mantenido específicamente en la construcción de los grandes proyectos de infraestructura del presente sexenio.

Expuesto lo anterior, el objetivo de este artículo es reflexionar en torno a la postura y política en relación con las privatizaciones en el gobierno de izquierda de Amlo para iden-

tificar el sello ideacional y las posibles salidas o rupturas en un contexto global en el que se privilegia la participación del capital en áreas neurálgicas del Estado. Afirmamos que las ideas en torno a la participación del sector privado bajo la actual administración se caracterizan por sancionar negativamente la privatización en sectores como el penitenciario, el energético, la salud y la educación, deteniendo, con ello, la inercia privatizadora impulsada por los gobiernos anteriores y posteriores a la alternancia electoral del 2000. Sin embargo, el triunfo de Amlo no ha implicado cambios significativos en sectores como las comunicaciones y transporte, ámbitos en los que el gobierno de Amlo no niega la necesidad de impulsar la participación del sector privado, máxime con las restricciones presupuestales impuestas por la pandemia del Covid-19.

Esta investigación es de carácter exploratorio, y tiene como propósito invitar a la construcción de reflexiones más profundas en torno a las privatizaciones en el gobierno de Amlo, tanto en la infraestructura, como en los servicios. Este artículo únicamente aborda las particularidades de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) –como una modalidad de las privatizaciones– en el desarrollo de infraestructura, del 2019 al 2021. Se trata de un trabajo de carácter documental que identifica las particularidades de la postura anti-privatización a lo largo de la trayectoria política de Amlo, y cómo su discurso o postura ideacional ha afectado, en ciertos sectores, la implementación de las APPs en el desarrollo de infraestructura pública bajo su gobierno. Las APPs son un esquema fuertemente impulsado desde organismos multilaterales para la creación de infraestructura pública y la provisión de servicios. Desde la década de los ochenta, gobiernos en distintas altitudes abrazaron dicha relación entre el sector privado y el público; sin embargo, aunque, en efecto, se trata de un ejemplo evidente de gobernanza –neoliberal–, afirmamos que este esquema es una modalidad de privatización de servicios y bienes públicos. Al respecto, desde la década de los noventa, México ha seguido una senda de profundización en la utilización de este modelo para generar bienes y servicios públicos; no obstante, con el arribo de Amlo a la presidencia del país, la implementación de las APPs ha sufrido modificaciones llamativas. Lo anterior puede comprenderse, en parte, por las características del sello ideacional antiprivatizaciones del primer presidente de izquierda en México.

Expuesto lo anterior, este artículo se estructura en cuatro secciones. La primera tiene como objetivo exponer la pertinencia de la dimensión ideacional en el estudio de los procesos de privatización, como un fenómeno propio de las sociedades contemporáneas. Con base en una revisión bibliográfica, se afirma que, en algunos contextos es posible identificar las variaciones que las ideas y discursos pueden generar sobre la concesión de bienes y servicios públicos a actores del mercado. En la segunda sección, y a manera de contexto, abordamos brevemente algunas particularidades del triunfo de Amlo; mientras que en la tercera parte nos adentramos en las particularidades de la política de infraestructura en el actual gobierno, destacando las rupturas y continuidades en el proceso de privatización iniciado en 1980. Concluimos afirmando que la postura antiprivatización de Amlo sí ha tenido consecuencias en las APPs para el desarrollo de infraestructura, permitiendo su utilización en sectores como el carretero y el de transporte, así como el agua y saneamiento, mientras

que en el sector energético estas se han visto con reservas, siendo utilizadas particularmente para el desarrollo de infraestructura. Por otro lado, el actual gobierno ha frenado la utilización de las APPs en ámbitos como el carcelario y el hospitalario.

De privatizaciones, ideas y el giro a la izquierda en México

Desde las ciencias sociales, las privatizaciones son concebidas como una problemática relevante, en tanto que se vincula a diversas temáticas y encaran múltiples desafíos. Ahora bien, debemos ubicar los procesos de privatización dentro de las transformaciones de la sociedad moderna o, retomando a Beck, la *sociedad global del riesgo*, donde el Estado ha transformado sus funciones, cediendo tareas medulares a actores sociales y económicos (2006). Sin embargo, la transferencia de activos estatales ha generado efectos contraproducentes. Por ejemplo, el Covid-19 ha develado las consecuencias perversas de la privatización del sector hospitalario en amplias regiones del planeta, incluyendo a los países desarrollados, donde ha sido más que difícil atender a los miles de contagiados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La actual pandemia ha evidenciado la catástrofe provocada por la privatización en distintos sectores donde solo quienes tienen ingresos suficientes pueden acceder a bienes y servicios como el agua, la educación y la atención médica, lo cual se traduce en violaciones a los derechos humanos de los más desfavorecidos (Farha, Bohoslavsky, Boly, De Schutter & Sepúlveda, 2020).

Situaciones como las experimentadas en la actualidad obligan a repensar las políticas encargadas, ya sea de encarar o continuar con los procesos de privatización en experiencias como la mexicana. En el estudio de las privatizaciones existe una agenda explorada por disciplinas como la ciencia política y la economía política, donde se pone atención en la interacción entre dinámicas locales y globales en la implementación o cancelación de procesos privatizaciones. De hecho, un área importante en el estudio de las privatizaciones es el rol de las ideas y la política partidista en la adopción, implementación o en el rechazo de la desincorporación de activos estatales, o bien en la adjudicación de contratos a actores del sector privado (Schneider & Jäger, 2003). Precisamente, considerar el posible peso del sello ideacional y las dinámicas partidistas aporta una mayor complejidad al estudio de las políticas económicas, identificando, con ello, el grado en el que las dinámicas locales afectan inercias impuestas por la globalización económica y financiera.

Una situación ampliamente conocida es el peso de organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, en el impulso de la primera gran ola de privatizaciones iniciada en la década de los ochenta. Para el caso de México, como en el de otros países de América Latina, se habló de los «préstamos a cambio de políticas», que significaron la implementación del decálogo del Consenso de Washington a condición de préstamos que pudieran paliar los efectos provocados por la de la deuda de 1982 (Babb, 2003). Sin embargo, otros elementos como las dinámicas políticas internas también pueden aportar información relevante en el estudio del neoliberalismo y, en específico, en las indagaciones sobre las caracte-

rísticas y posibles determinantes de la venta de activos estatales y otras formas de privatización –APPS, destacando dentro de ellas las concesiones y la delegación de responsabilidades sobre la generación y distribución de bienes y servicios públicos al sector privado. En este orden de ideas, vale la pena recuperar la acertada postura de Hewitt, quien invita a alejarse de las explicaciones monocausales sobre las políticas neoliberales y la globalización; es decir, de las respuestas consideradas como «lugares comunes, fenómenos que suelen mencionarse de paso en una especie de rito sobreentendido sin utilidad analítica real» (2018, p. 9).

Ciertamente, desde la perspectiva ideacional se pone atención en el rol de las ideas –concepciones sobre cómo los actores consideran que debe estructurarse la vida en sociedad– en el impulso del programa neoliberal y, en particular, de las privatizaciones (Schneider & Jäger, 2003). El denominado giro ideacional (*ideational turn*) es una perspectiva que tomó impulso dentro del institucionalismo histórico (Hall & Taylor, 1996; L. & Pedersen, 2001; Schmidt, 2010) historical, and sociological – have increasingly sought to ‘endogenize’ change, which has often meant a turn to ideas and discourse. This article shows that the approaches of scholars coming out of each of these three institutionalist traditions who take ideas and discourse seriously can best be classified as part of a fourth ‘new institutionalism’ – discursive institutionalism (DI. Desde esta mirada, las ideas o sistemas de creencias, los paradigmas de política y los discursos adquieren un papel importante en la acción política y, por supuesto, se traducen en políticas públicas o resultados políticos concretos. Para propósitos de este artículo, se concibe a las ideas como el sistema de creencias o formas de ver el mundo que son construidas por actores sociales, políticos y económicos a lo largo de un aprendizaje. Tal sistema de creencias se configura a lo largo de las trayectorias individuales y colectivas donde la experiencia, la educación y los roles son ingrediente fundamental en las concepciones sobre la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad (Esch, 2015, p. 6). En este orden de ideas, para el caso mexicano, Babb (2002) afirma que la transición del intervencionismo al neoliberalismo respondió a diferentes factores donde destacan las ideas favorables al libre mercado y la contracción del Estado, defendidas por una élite política formada en las facultades de economía de las principales universidades de Estados Unidos. A su vez, es preciso no omitir la configuración de la clase política tecnócrata y su base empresarial rentista de apoyo (Schamis, 1999).

Al respecto, podemos afirmar que los sexenios posteriores a la crisis de 1982 siguieron inercias que consolidaron el modelo económico y político neoliberal, desde el que se justificó la privatización de activos estatales y la concesión de bienes y servicios públicos. Las privatizaciones en América Latina se profundizaron en 1990, justificadas con el paradigma de la Nueva Gestión Pública, bajo la idea de que el Estado es incapaz por sí solo de satisfacer las demandas y necesidades de su población (Guerrero, 2004; Harvey, 2007). No obstante, hay que hacer notar algunas diferencias. Al respecto, Ducatenzeiler y Oxhorn (2012) afirman que el impulso del programa neoliberal en países como México, Brasil y Argentina no logró obtener niveles de legitimidad democrática y eficiencia económica, tal como sí ocurrió con la experiencia chilena. En particular, indican que el éxito chileno, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, se debió a que contaba con un «sistema de partidos abarcativo, capaz

de organizar y articular los principales intereses de la sociedad chilena a lo largo de todo el espectro político», en adición al gradual debilitamiento de la izquierda (2012, p. 48).

Más allá del relativo éxito en algunas experiencias, en la recta final de 1990, la región latinoamericana vislumbró cambios de gran envergadura como el gradual giro a la izquierda, que significó el triunfo o llegada al poder de opciones políticas con diferencias sustanciales respecto a la élite tecnócrata que se asumió como defensora del monetarismo ortodoxo. En específico, de acuerdo con Ardití (2009, p. 240), este giro a la izquierda va más allá del cambio electoral, pues involucró la configuración de un nuevo centro político –es decir, una transformación en el sentido común político e ideológico– que apostó por la igualdad, la redistribución, un aumento en el gasto público y por una mayor inclusión de la diversidad. Además, este nuevo sentido o centro político defiende el fortalecimiento del Estado, que debe transitar de regulador a interventor.

A diferencia de lo ocurrido en Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Nicaragua y Chile, en México no se concretó el triunfo de la izquierda, sino hasta la recta final de la segunda década del siglo xx. De hecho, la posible llegada de la izquierda pudo vislumbrarse en 1988, con la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), coalición que congregó a disidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a una diversidad de actores individuales y colectivos de las distintas izquierdas en el país. Esta ruptura en el PRI respondió, en cierta medida, a la falta de democracia interna en el proceso de selección del candidato presidencial, siendo usuales prácticas informales como las camarillas políticas y «el dedazo». Además, en lo que refiere a la política económica, cada vez se hizo más insostenible la relación entre quienes apostaban por un mayor intervencionismo estatal, de la mano del keynesianismo, y los tecnócratas, quienes defendían el nuevo modelo económico sustentado en el monetarismo ortodoxo (Babb, 2003, 2005).

No obstante, la elección presidencial de 1988 se revistió de dudas, pues la inexistencia de autoridades electorales independientes no permitió garantizar certeza en los resultados electorales, convirtiendo este proceso en uno de los más cuestionados de la historia reciente de México –junto con la elección presidencial del 2006– (Espejel & Díaz, 2018). Finalmente, después del triunfo de Carlos Salinas de Gortari devino una profundización del modelo neoliberal, impulsada por los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Con la llegada del primer gobierno de la alternancia en el año 2000, solo había una certeza: el impulso irrestricto de las *reformas estructurales*, mismas que, a cuentagotas, se impulsaron por los gobiernos subsiguientes. Por tanto, en el 2018, la llegada de Amló a la presidencia del país motivó múltiples preguntas en torno a las continuidades y transformaciones en la política económica del país, específicamente en lo relativo a las privatizaciones y a la persistencia de una de sus modalidades: las asociaciones público-privadas.

Como se mencionó, la concurrencia de las elecciones presidenciales con la renovación del Congreso de la Unión y con algunas gubernaturas ha permitido a Amló tener un mayor margen de maniobra en la aprobación de algunos de sus proyectos y propuestas más im-

portantes. Retomando a Strange (1995), si bien la globalización financiera limita las rutas a seguir por parte de los gobernantes al interior de los países –dado que, al menos desde la década de los ochenta algunas naciones han tenido que adoptar el programa privatizador y otras medidas de liberalización económica– la debacle de la retórica neoliberal –específicamente a partir de la crisis de 2008–, así como la importancia del sello ideológico-partidista pueden tener un peso significativo a la hora de tomar ciertas decisiones en materia de política económica. En este orden de ideas, Amlo llegó al gobierno con un alto nivel de aceptación y con un respaldo legislativo que le ha permitido impulsar cambios inimaginables, específicamente en lo que se refiere a los grandes proyectos de infraestructura con inversión pública privada, redefiniendo, con ello, la relación entre el Estado y el mercado. Dicho esto, en la siguiente sección se abunda sobre el triunfo de Amlo para dar paso a su proyecto político en el que es posible identificar una nueva concepción en torno al papel que debe desempeñar el Estado, en el que la crítica a las privatizaciones ha revestido de legitimidad su discurso público.

Sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador

El 2 de junio de 2018 fuimos testigos de un resultado electoral nunca imaginado para la izquierda partidista en México. Después de participar en dos procesos en los que gradualmente redujo su votación –terminando en segundo lugar en la elección de 2012– en 2018, Amlo llegó a la Presidencia de la República con una aplastante mayoría, de la mano de la coalición *Juntos Haremos Historia*, conformada por el Partido del Trabajo (PT), el desaparecido Partido Encuentro Social (PES) y Morena –del cual es el principal liderazgo político. Esta coalición partidista obtuvo 18 millones de sufragios, que se tradujeron en el 41.87% del total de la votación; mientras que la coalición *Por México al Frente*, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el PRD –del que Amlo fuera su principal liderazgo– y Movimiento Ciudadano (MC), consiguió 11 millones 264 mil votos, que representaron el 26% de la votación. En la tercera posición quedó el PRI, otrora partido hegemónico en México, que de la mano con Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) conformaron la coalición *Todos por México*, la cual logró 5 millones 184 mil votos, es decir, el 11.96% del total de los sufragios emitidos. Además, habría que agregar que Morena se hizo del control de 19 congresos locales, de los 26 en disputa en este proceso electoral (Sánchez, 2018).

Morena, el partido del presidente, también logró una posición privilegiada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues en el Senado obtuvo 59 curules, mientras que la Cámara de Diputados se hizo de 247 escaños (Díaz, 2019). En este escenario, el gobierno de Amlo ha sido capaz de imprimir su sello en las políticas públicas, cuyas directrices generales se encuentran en el *Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024*. Apoyado o increpado, se trata de un personaje *sui generis* que logró lo que pocos hubieran asegurado años atrás.

En septiembre de 2012, AMLO se separó de su antiguo partido, el PRD, para formar Morena, organización que obtuvo su registro oficial en 2014 (Bolívar, 2020). Nunca en la

historia reciente de México una nueva organización partidista había logrado resultados tan promisorios como los que obtuvo Morena en 2018. Con una enorme legitimidad, y en un escenario donde problemas como la corrupción, la seguridad y el rezago económico y social son las principales preocupaciones de la población, el nuevo gobierno se asumió como instrumento de la Cuarta Transformación (4T, de aquí en adelante), en una clara alusión a coyunturas históricas como la Guerra de Independencia –que tuvo lugar de 1810 a 1821, considerada la primera gran transformación–, las reformas juaristas –de 1857 a 1861, es decir, la segunda transformación–, y la Revolución Mexicana –que de 1910 a 1917 encarnó la tercera transformación. Con ello, el gobierno lopezobradorista se presentó como el único facultado para llevar a cabo una metamorfosis pacífica y de gran envergadura, siendo las decisiones gubernamentales implementadas bajo su administración los instrumentos para concretar la 4T.

Ahora bien, es posible identificar distintos factores que posibilitaron el triunfo de Amlo. Sin el ánimo de ser exhaustivos, se pueden señalar la débil legitimidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente en la recta final de su mandato, a causa de los numerosos escándalos de corrupción en los que él y miembros de su gabinete se vieron inmiscuidos; la crisis del modelo neoliberal, así como el débil apoyo electoral a los otrora partidos mayoritarios del país –PRI, PAN y PRD–, propiciado por su ejercicio de gobierno poco satisfactorio. Por tanto, para 2018, de acuerdo con la encuestadora Mitofsky (2018), el expresidente Enrique Peña Nieto contaba con un ínfimo apoyo ciudadano, concluyendo su sexenio con una aprobación del 24% de los mexicanos, mientras que el 74% reprobó su desempeño. Un sexenio catastrófico, si se toma en cuenta que en el inicio tuvo el 54% de aprobación por parte de los mexicanos.³

La *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental* del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2017 (Inegi) coincidía con los datos aportados por Mitofsky, colocando la inseguridad como uno de los temas que más inquietaba a los mexicanos –73.7%, cifra que se elevó en comparación con el 2015, momento en que al 66.4% de los encuestados les preocupaba dicho tema. En segundo lugar, ubicaba la corrupción, problema que inquietaba al 56.7% de los mexicanos. Identificando la misma tendencia, para el 2018, el Inegi mostró que para el 64.5% de los mexicanos la inseguridad se ubicaba como el problema más apremiante. El segundo problema que más alarmaba a los mexicanos fue el aumento de precios (36.3%), seguido del desempleo (33.2%), la corrupción (29.2%) y la pobreza (27.8%) (Inegi, 2018).

Por tanto, es indudable que Amlo fue hábil en construir un discurso público en el que logró incorporar dichos problemas. De hecho, la lucha contra la corrupción se convirtió en el principal estandarte del gobierno lopezobradorista. Como se indicó, los numerosos actos de corrupción protagonizados por Enrique Peña Nieto, y por miembros de su go-

³ De igual forma, la encuestadora daba evidencia de los principales problemas que percibían los mexicanos en 2018, según su orden de importancia: inseguridad (38.9%), crisis económica (31.9%) y corrupción (23.6%) (Mitofsky, 2018).

bierno, fueron el referente inmediato que urgía solucionarse. Las privatizaciones, por su parte, mantuvieron su halo negativo para el actual presidente. Basta recordar que el propio Amlo ha afirmado en numerosas ocasiones que la privatización es sinónimo de corrupción (Martínez, 2020). A su vez, ambos problemas le han permitido diferenciarse de las administraciones anteriores, en las que se profundizó lo que la actual administración denomina «el desarrollo privatizador» (Gobierno de México, 2019b).

El énfasis en la separación entre el poder político y el poder económico forma parte de su retórica. Al respecto, es importante recuperar un fragmento del discurso que Amlo dio el 1 de julio de 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral:

Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero, ni se considera que las privatizaciones sean la panacea. Además, se establece el criterio de separar el poder político del poder económico y que el gobierno de la República, el gobierno represente a todos los mexicanos, no solo a una facción o a una minoría (López Obrador, 2019).

A pesar del énfasis en la separación entre el poder político y el poder económico, es posible identificar algunas tensiones, como el nombramiento de Alfonso Romo Garza, quien fungiera, hasta diciembre de 2020, como jefe de la oficina de la Presidencia de la República, así como la construcción de grandes proyectos de infraestructura que son coherentes con la lógica de acumulación de capital. Sobre la primera contradicción, Alfonso Romo es un poderoso empresario neoleonés, acusado de prácticas monopólicas como, por ejemplo, en el manejo del agua y en la agroindustria (Navarro, 2020). En cuanto a la segunda contradicción, el actual gobierno ha asignado contratos a empresas constructoras cuestionadas por hacerse de millonarias ganancias en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sobre el proyecto político de Amlo, constantemente se apela al pueblo, así como a los pobres; por tanto, las estrategias gubernamentales tendrían como propósito disminuir las desigualdades socioeconómicas –«por el bien de todos, primero los pobres»– (Presidencia de la República, 2020). Amlo constantemente se asume como antineoliberal; sin embargo, su proyecto de izquierda nacionalista comulga con el proceso de acumulación capitalista (Bolívar, 2020), situación que se hace evidente en el impulso a los magnos proyectos de infraestructura de la actual administración.

Ahora bien, la perspectiva ideacional permite poner atención en el conjunto de ideas y cosmovisiones sobre las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. De hecho, para este gobierno, el Estado debe ser dotado de facultades que les permitan lograr los objetivos prioritarios. Sin embargo, como ha sido evidente en el actual ejercicio de gobierno, la participación del sector privado no es considerada una opción en la generación de bienes y servicios en sectores como la salud, la educación y la seguridad –específicamente en el ámbito penitenciario–, como se discute en la siguiente sección. De hecho, en el *Plan Na-*

cional de Desarrollo 2019-2024 se afirma que el mercado no sustituirá al Estado (Gobierno de México, 2019b).

Habría que indicar, como se expone en el siguiente apartado, que sí es posible identificar un cambio en el grado de participación del sector privado en la generación de bienes y servicios públicos. Mientras que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto profundizaron la utilización del esquema de APPS, modalidad dentro de las privatizaciones, bajo el gobierno de Amlo, este tipo de inversión ha sido impulsada en la construcción y en el manejo de infraestructura pública, específicamente en los sectores carretero y transportes. La inversión en estos sectores, de acuerdo con el propio gobierno de Amlo, permitiría detonar los polos de desarrollo para frenar la emigración interna y externa, motivada principalmente por la búsqueda de mejores condiciones de vida (SCT, 2019). Sin embargo, esta justificación puede ser cuestionable.

Pese a existir grandes expectativas sobre su gobierno, al menos del electorado, «no todo es miel sobre hojuelas». Hablamos de un gobierno que ha tenido problemas endógenos y exógenos importantes. En el primer caso, hasta julio de 2020, 18 funcionarios ya habían presentado su renuncia, desde secretarios de Estado –Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Seguro Social–, hasta subsecretarios –Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud– e integrantes de órganos reguladores –Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En torno al segundo caso, la pandemia derivada del Covid-19, sin duda, representa el desafío externo más fuerte en lo que va del sexenio, debido a sus devastadoras consecuencias sociales y económicas, las cuales, en parte, se hacen más visibles debido a la disminución de la inversión en gasto social en los últimos sexenios (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2019). Además, los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el actual gobierno son cuestionados por privilegiar a los conglomerados económicos rentistas, que desde hace varios sexenios se han beneficiado de contratos millonarios y, en algunos casos, de rescates –como ocurre con el caso de Ingenieros Civiles Asociados (ICA)– y por generar conflictos medioambientales.

Proyectos de infraestructura e inversión público-privada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: cambios y continuidades

El triunfo de Amlo ha generado una serie de preguntas como cuál será el posible impacto de su programa de gobierno en la interrelación Estado-mercado-sociedad. Recordemos, como se discutió en la primera sección, que desde la recta final de la década de los ochenta se promovieron, desde instancias multilaterales, así como por las propias élites políticas y económicas, un programa de ajuste estructural en donde la privatización fue pieza fundamental. Por tanto, y desde una mirada ideacional, el actual gobierno, con su retórica anti-privatización, puede dar lugar a variaciones y continuidades en la concesión de bienes y servicios públicos. En particular, resulta útil adentrarse en el análisis de las características

de los grandes proyectos de infraestructura impulsados en el gobierno de Amlo, así como en los rubros donde la inversión privada y transferencias de recursos públicos a sectores económicos y sociales continúan, y aquellos en donde estas han sido canceladas.

Una de las críticas medulares enarbolada por Amlo, no solo al asumir el control del Poder Ejecutivo, sino desde el inicio de su trayectoria política, es la oposición a la venta de activos estatales y a la transferencia de recursos públicos a sectores económicos que, desde la década de los noventa, han desempeñado funciones que corresponden al Estado. Su crítica férrea a las reformas estructurales se relaciona con su oposición a la privatización del sector energético –cuya transformación más importante tuvo lugar en el 2013, con la *reforma energética* impulsada dentro del *Pacto por México*, en el gobierno de Enrique Peña Nieto– y, en general, al modelo neoliberal. De igual forma, Amlo ha mantenido una posición recelosa hacia la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos como son la salud, la educación y la seguridad. Además, mucho antes de su llegada a la presidencia manifestó su abierta oposición a las concesiones mineras y a los parques eólicos, impulsados, con gran ahínco, en los sexenios previos.

Ahora bien, la victoria electoral de Amlo en 2018 forma parte de un proceso de larga data que le ha permitido adquirir un constante aprendizaje en torno a las estrategias más pertinentes para lograr sus objetivos políticos en un escenario caracterizado por una gran complejidad y contingencia. Por ejemplo, en los procesos electorales de 2006 y 2012, Amlo mantuvo una posición más agresiva contra el sector empresarial (Díaz & Espejel, 2020). En específico, en el proceso electoral de 2006, grandes cúpulas empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezaron una campaña negra en contra del político tabasqueño, cuyo propósito fue evitar su llegada a la presidencia del país (Aziz & Alonso, 2009; Díaz, 2011). En este contexto, Amlo acuñó la conocida frase «La mafia del poder», para referirse a una clase política y empresarial donde, de acuerdo con el tabasqueño, la figura predominante era y sigue siendo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como algunos empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los rescates –por ejemplo, en los sectores bancario y carretero. Su derrota, en medio de la actuación cuestionable del Instituto Federal Electoral –ahora Instituto Nacional Electoral–, motivó un conjunto de protestas encabezadas por el propio Amlo, siendo la más llamativa el plantón que recorrió una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma (Díaz, 2011b).

Sin embargo, la tensión con ciertos sectores de la clase política y empresarial tiene una larga historia, siendo el rechazo a las privatizaciones uno de los ejes centrales en su proyecto de Estado. Desde el inicio de su trayectoria, en la década de los setenta –al lado del poeta Carlos Pellicer– Amlo formó parte del grupo al interior del PRI que pugnaba por la rectoría del Estado sobre la economía. De hecho, se unió al grupo disidente que en 1988 protagonizó una de las mayores fracturas en la historia del PRI, dando lugar a la conformación del Frente Democrático Nacional, cuya figura más emblemática fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (Amlo, 2020; Bolívar, 2013; Navarrete & Rosiles, 2019). Precisamente, la ruptura tuvo lugar en un contexto en el que el proyecto neoliberal se posicionó como hegemónico, siendo concebido como la solución para contener el gran déficit presupuestal en casi todas

las economías del mundo. Con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari en 1988, en medio de una elección fuertemente cuestionada por la legitimidad de los resultados, se impulsó una reingeniería institucional de gran envergadura que transformó la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Desde este sexenio se hablaba de «modernización», «cambio» y «reforma del Estado», que formaban parte del liberalismo social mexicano, desde el que se impulsaron las acciones gubernamentales (Bautista, 1995; Rousseau, 1995).

En este sentido –y aun con sus particularidades como el beneficiar a ciertos conglomerados económicos y no seguir las reglas de la libre competencia defendidas por el programa neoliberal–, las reformas económicas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari integraron al país a la economía global. En esta administración se profundizó la tendencia iniciada con Miguel de la Madrid, en cuyo sexenio fueron privatizadas varias empresas dedicadas a actividades consideradas no prioritarias. De acuerdo con Sacristán (2006), de 1982 a 1988 se liquidaron y extinguieron 294 empresas; además, se realizaron 72 fusiones y 25 transferencias. En ese periodo, 155 empresas se convirtieron en activos transferidos al sector privado y al sector social, específicamente a centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Una buena parte de las empresas transferidas eran filiales de Nacional Financiera y de SOMEX, antecedente del banco Santander. Otro conjunto de empresas tuvo que sanearse para posteriormente ser ofertadas.

Con Salinas de Gortari inició la privatización del sector bancario, destacando la venta de instituciones como Banamex, Bancomer, Serfin y Comermex –después de que en 1982 la banca fuera nacionalizada en la recta final del gobierno de José López Portillo (*El País*, 1990). Destacan también el caso de Teléfonos de México (Telmex), así como el impulso a las concesiones carreteras, sector que bajo el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue rescatado con una millonaria inversión (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2007). Sin embargo, dentro de la primera ola de reformas estructurales, en el sector energético únicamente se permitió la participación del sector privado por medio de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (PIDIREGAS). En particular, los PIDIREGAS tuvieron como propósito el desarrollo de obras de infraestructuras asignadas a empresas, vía licitación internacional. El propósito de estos proyectos fue no comprometer recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicano (Pemex), para la creación de infraestructura en este sector estratégico; sin embargo, sirvió como punto de arranque para construir infraestructura carretera con inversión privada.

En este contexto, AMLO mantuvo una postura anti-privatizaciones, aunque con algunas mutaciones a lo largo de su trayectoria como líder político. Por ejemplo, después de su salida del PRI, en 1988 y en 1994 fue candidato a gobernador por el estado de Tabasco; sin embargo, en ambas ocasiones perdió ante los candidatos del Revolucionario Institucional. En este último proceso, quien resultó ganador fue Roberto Madrazo, situación que motivó varias protestas encabezadas por AMLO para impugnar el resultado electoral. Además, entre las demandas destacaron el «no a la privatización de PEMEX», así como la exigencia de enjuiciar y confiscar los bienes de Carlos Salinas de Gortari.

Precisamente, la actual postura de AMLO que defiende la rectoría del Estado sobre el sector energético encuentra su antecedente en la lucha contra la paulatina participación de la iniciativa privada en Pemex. Esta posición lo enfrentó a los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en 1995, con el anuncio de la venta de 61 plantas de petroquímica propiedad de la paraestatal Pemex, el político tabasqueño sugirió la organización popular para comprar dichas plantas, emulando lo realizado en 1938 con la expropiación petrolera (Aguilar, 1996a, 1996b; Mari, 1995; Quintana, 1996). Como dirigente nacional del PRD, Amlo fue visto con recelo por la cúpula empresarial, sector que lo identificó como un obstáculo en la liberalización del sector energético (Aguilar, 1996b). Además, fue abierta su oposición al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) (López Obrador, 1999), fideicomiso por el cual se absorbió como pública la deuda de los bancos que incurrieron en «riesgo moral».

Es pertinente señalar que en el gobierno de Zedillo se profundizó la transferencia de activos estatales a actores del mercado, tendencia que continuó en los gobiernos después de la alternancia. De hecho, con el sector carretero se impulsó el esquema de APPS, bajo el nombre *Programa de Aprovechamiento de Activos* (PPS). Con el gobierno de Vicente Fox Quesada, la utilización de las APPS se extendió a otros sectores como el agua, los transportes y el hospitalario, mientras que a nivel subnacional se convirtieron en una opción atractiva para gobiernos estatales y municipales (Espejel & Díaz, 2015; Mendoza, 2012a, 2012b). Al respecto, desde organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se incentivó el financiamiento de infraestructura y servicios públicos por medio del esquema de APPS. Aunque existe una discusión sobre si es pertinente o no ubicar dicho esquema dentro de lo que conocemos como privatizaciones, autores como Zohlhöfer et al. (2008) afirman que es posible destacar al menos tres formas que pueden adquirir las privatizaciones: la formal, la sustancial y la funcional. En cuanto a la privatización formal, el Estado transfiere a una empresa paraestatal algunas tareas o actividades que funcionan bajo la lógica del mercado. Para el caso mexicano, un ejemplo puede ser la Administración Aeroportuaria Integral (API). La segunda modalidad implica la venta de un activo estatal, transfiriéndolo en su totalidad al sector privado. Las privatizaciones de las décadas de los ochenta y noventa se agrupan en esta modalidad. La tercera implica la subcontratación, que se traduce en la transferencia de responsabilidades sobre bienes y servicios públicos a empresas privadas. Acá ubicamos a las APPS, así como sus distintos esquemas de concesión.

Las APPS se han convertido en una estrategia prioritaria para el desarrollo de infraestructura y la distribución de servicios públicos en América Latina. De acuerdo con datos del propio Banco Interamericano de Desarrollo, tan solo entre 2006 y 2015 las inversiones en infraestructura para la región latinoamericana oscilaron los 361 000 millones de dólares, que se tradujeron en 1000 obras, específicamente en el sector energético y de transporte. Las APPS han visto un gran crecimiento en Brasil –65% de la infraestructura desarrollada mediante este esquema se encuentra en este país–, seguido de México (11%) y Colombia (7%) (Oficina de Evaluación y Supervisión, 2017).

Con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, en medio de un cuestionado triunfo electoral, las APPS rápidamente se extendieron a otros sectores, como la seguridad pública, por medio de la adjudicación directa para la construcción de prisiones de alta seguridad en varias entidades del país (Espejel & Díaz, 2020; Espejel & Díaz, 2015). A propósito, Amlo ha criticado fuertemente la privatización de múltiples funciones que correspondían al Estado. Por ejemplo, en noviembre de 2020, en una de sus conferencias matutinas, comentó, con molestia, que bajo gobiernos previos se privatizaron las prisiones, así como el puerto de Veracruz, por medio de una concesión de 100 años, a cargo de la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz, SA de CV (API), en convenio con *CK Hutchison Holding Limited*, situación por la que buscaría revocar los contratos (Forbes Staff, 2020). Lo anterior en cierta coherencia con lo señalado en el *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*, donde bajo el gobierno de la llamada *Cuarta Transformación* se anunciaba el aparente fin del neoliberalismo (Gobierno de México, 2019c).

En términos discursivos, esta afirmación es relevante, pues después del fracaso de este modelo político y económico en la distribución de la riqueza, Amlo mantiene su posicionamiento en contra de las privatizaciones. Ya en el gobierno, resulta obvio que es imposible estatizar todos los ámbitos de la economía. Sin embargo, se pueden identificar algunas continuidades y rupturas.

La postura que Amlo ha mantenido en torno a la participación del sector privado en tareas que tradicionalmente correspondían al Estado y, en particular, sobre el impulso de las privatizaciones y algunas de sus modalidades como las asociaciones público-privadas, se ha transformado a lo largo de su trayectoria política. En los últimos años, gracias al aprendizaje estratégico obtenido después del proceso electoral de 2006, su postura en torno a la participación privada en funciones estatales ha sufrido algunos matices (Díaz & Espejel, 2020). En el gobierno, y en un evidente viraje discursivo, Amlo recientemente afirmó lo siguiente:

Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, repito, el que trabaja, el que invierte, el que hace dinero con respeto a las leyes merece protección, apoyo y reconocimiento. Es muy importante que se entienda que nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción (Declaración de Amlo recuperada por *El Universal*, 2020).

Esta aparente contradicción debe situarse en un contexto caracterizado por un intenso embate hacia la figura del actual presidente de México, identificándolo –desde ciertos círculos del poder político y económico– como un personaje contrario, tanto al capital privado como a las instituciones democráticas. En el marco de esta nueva relación con el sector privado, en 2019, el Gobierno Federal anunció un primer *Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado*, plan para llevar a cabo en conjunto con las principales cámaras del sector empresarial –antiguos adversarios de Amlo, con las que continúa manteniendo una relación tensa– como son el CCE, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Confederación

Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de las privatizaciones

de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). Este ambicioso programa de infraestructura comprometió 147 proyectos en sectores estratégicos como son el transporte –carreteras y puentes–, las telecomunicaciones, el agua y su saneamiento –específicamente infraestructura hidráulica–, la energía y el sector turístico (Gobierno de México, 2019a).

Tabla 1

Proyectos de infraestructura con inversión público-privada anunciados en el primer paquete

Sector	Número de proyectos por plazo			
	2020	2021-2022	2023-2024	Total
Transporte	50	27	24	101
Carreteras	15	9	18	42
Ferrocarriles, trenes suburbanos	3	2	3	8
Puertos	16	4	3	22
Aeropuertos	17	12	-	29
Telecomunicaciones	2	2	-	4
Agua y saneamiento	4	8	-	12
Energía	6	-	1	7
Energía eléctrica	-	-	6	6
Turismo	9	3	3	15
Salud	1	-	-	1
Otros	-	1	-	1
Total	72	41	34	147

Fuente: Gobierno de México (2019a).

Sociedades locales bajo riesgos globales

Tabla 2

Inversión privada de los 147 proyectos anunciados en el primer paquete de obras de infraestructura

Sector	Monto de inversión por plazo en millones de pesos			
	2020	2021-2022	2023-2024	Total
Transporte	114 703	83 279	85 871	283 853
Carreteras	38 255	24 957	36 917	100 129
Ferrocarriles, Trens suburbanos	22 650	18 840	26 054	67 544
Puertos	24 594	26 227	22 900	73 721
Aeropuertos	29 204	13 255	-	42 459
Telecomunicaciones	86 561	31 492	-	118 053
Agua y saneamiento	15 998	30 502	-	46 500
Energía	81 780	-	3200	84 980
Energía eléctrica	-	-	63 560	63 560
Turismo	130 964	102 720	19 080	252 764
Salud	1312	-	-	1312
Otros	-	8000	-	8000
Total	431 318	255 993	171 711	859 022

Fuente: Gobierno de México (2019a).

Si observamos las tablas 1 y 2, la inversión público-privada se concentra principalmente en el sector carretero, como ha ocurrido tradicionalmente. Sin embargo, destacan algunos cambios relevantes si consideramos la política de infraestructura de los gobiernos que llegaron al Poder Ejecutivo después de la alternancia electoral del 2000.

En medio de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, Amlo anunció el segundo paquete de proyectos de infraestructura que contempla el desarrollo de 39 obras por medio del esquema de APPS, que implicarán una inversión de 297 mil 344 millones de pesos (*El Economista*, 2020).

Además de los proyectos incluidos en el plan de infraestructura del gobierno, mención especial merecen las magnas obras de infraestructura anunciadas por el propio Amlo, las cuales formaron parte de su plataforma electoral. Destaca, en primer lugar, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base de Santa Lucía, que sustituirá al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), una de las grandes obras de su antecesor Enrique Peña Nieto (Reforma Staff, 2018a, 2018b). De hecho, el NAICM fue cancelado mediante una consulta pública en la que participaron 1 millón 067 mil 859 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, votando a favor de la cancelación de

este proyecto el 69.95% de los participantes. Con el triunfo en 2018, Amlo concretó la cancelación, advirtiendo actos de corrupción en la licitación de la obra, así como su sobrecosto (BBC News Mundo, 2018; SCT, 2019).

Sin embargo, desde su anuncio, esta decisión despertó las alarmas por parte de las cúpulas del sector empresarial, de organismos financieros internacionales y de calificadoras. En general, se coincidió en que esta decisión provocaría un clima de incertidumbre para la inversión privada en México, y podría representar un freno para el desarrollo del país (Forbes Staff, 2018; Posada, 2018). Sin duda, se trató de una decisión arriesgada que Amlo sorteó de manera victoriosa, aunque no sin críticas. Mientras que sobre el NAICM se proyectó su construcción total en 2024, el aeropuerto Felipe Ángeles lleva un avance del 43.6%, esperando sea concluido en 2022 (De la Rosa, 2020).

Otra obra cuestionada por el posible impacto ambiental es el *Tren Maya*, megaproyecto que implica concesionar a privados el diseño, la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la operación de la obra desarrollada en el sureste mexicano –requerirá una inversión de 139 100 000 000 de pesos, y abarcará los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán– (Banobras, 2020; Ceceña & Veiga, 2019). Este proyecto estrella del gobierno –continuación del *Tren Transpeninsular* anunciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto (Rangel, 2018)– fue sometido a consulta pública; sin embargo, dado que se trataba de un proyecto prioritario del gobierno de Amlo, los resultados fueron favorables (*El Economista*, 2019). Precisamente la consulta ha sido otro de los aspectos fuertemente criticados desde instancias como, por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde donde se afirmó que el proyecto no cumplió con requerimientos como la adecuada consulta y el consentimiento de las comunidades indígenas (ONU, 2019). Empero, aunque el proyecto es cuestionado por algunos sectores ecologistas, donde se incluyen ex titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), específicamente de los denominados gobiernos neoliberales, es necesario no perder de vista que las selvas del sureste mexicano han sufrido un grave proceso de degradación y fragmentación del hábitat, debido a actividades humanas como las obras de infraestructura –construidas sin considerar perspectivas como la ecología de carreteras y la agroindustria (CONAFOR, 2020).

El Corredor Multimodal Interoceánico (Corredor Transísmico) es otro de los grandes proyectos del gobierno de Amlo, el cual, al igual que Tren Maya, es un plan que retoma las intenciones de gobiernos anteriores. Se trata de una versión renovada del Plan Puebla-Panamá, cuyo propósito es establecer una conexión entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, involucrando una inversión estimada de 46 mil 600 millones de pesos. El esquema por el que se desarrollará este proyecto –el cual se encuentra en pausa, debido al Covid-19– es por medio de la inversión público-privada. Sin embargo, esta megaobra ha generado resistencia por parte de comunidades de pueblos indígenas, las cuales vaticinan un peligro inminente de despojo de sus tierras (Oropeza, 2019).

En el sector energético también se ha permitido la inversión del capital privado, posibilitado por la reforma en dicho sector. Cabe señalar que la inversión en APPS en el sector

energético se circunscribe únicamente a energías fósiles, así como a la creación de infraestructura para la generación de energía eléctrica (López Obrador, 2020; Mentado, 2020). La energía es un tema complejo para el gobierno de Amlo; sin embargo, su administración no descarta la aprobación de una nueva reforma en el sector, situación que ha activado las alarmas en la cúpula empresarial, así como en algunos círculos de la clase política mexicana (Energía a Debate, 2020). De hecho, con la iniciativa enviada por Amlo al Congreso de la Unión, el 1 de febrero de 2021 se busca fortalecer a la CFE, hecho criticado por quienes se beneficiaron de la reforma de 2013. Sin embargo, además de favorecer la producción de energía por parte de la paraestatal energética, se contempla que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tenga la obligación de revocar contratos de abastecimiento que se hayan adjudicado de manera fraudulenta (Cota, 2021; López, 2021).

Otra crítica al gobierno de Amlo es su preferencia por las energías fósiles, cuando en la actualidad hay una gran presión hacia los gobiernos de distintos países para que adopten una política energética a favor de las denominadas energías limpias, aun cuando estas también tienen efectos negativos para el medio ambiente –basta mencionar el caso de las minas de coltán en distintas regiones del mundo, especialmente en los continentes americano y africano. Además, Amlo ha puesto en jaque a la industria eólica al cancelar proyectos y dejar en lista de espera, en medio de la crisis sanitaria, la aprobación de parques eólicos, como los que serían ejecutados por AES y *Electricite de France* (De Haldevang & Stillman, 2020).

Es decir, si bien la utilización de las APPs para la generación de infraestructura es una opción prácticamente ineludible, es posible identificar variaciones en su implementación, así como en el tipo de obras y servicios generados a partir de estas. Por ejemplo, aunque desde el gobierno de Vicente Fox este esquema fue impulsado en sectores como el hospitalario, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha develado una serie de problemas estructurales en el sector salud, donde ha quedado al descubierto la incapacidad de la infraestructura para atender a los pacientes afectados por el virus. Habría que recordar que en varias entidades federativas el uso de las APPs fue privilegiado por los gobernadores quienes, ante restricciones presupuestales, acudieron al endeudamiento y a la inversión privada para construir bienes públicos. Numerosos hospitales de alta especialidad creados en las últimas décadas son un ejemplo de ello. Algunos de los casos más polémicos los ubicamos en el Estado de México, específicamente bajo la gestión de quien fuera su gobernador entre 2005 a 2011, el priísta Enrique Peña Nieto (*Sin Embargo*, 2012). En dicha entidad, se construyeron hospitales con sobrecosto que, en algunos casos, fueron inaugurados aun cuando la obra nunca fue concluida. Situación parecida aconteció a nivel federal, precisamente en el gobierno de Peña Nieto, ya como presidente del país, pues en su administración se construyeron cerca de 326 hospitales con problemas físicos que han sido cancelados en la presidencia de Amlo (Forbes Staff, 2019). La construcción de hospitales con el esquema de APPs en el gobierno de Amlo aún se mantiene en suspenso; sin embargo, en los dos acuerdos de infraestructura presentados en 2019 y 2020 no se ha contemplado la inversión por medio de APPs en este sector.

Finalmente, un área problemática en México es la inversión público-privada para la construcción y manejo de prisiones. Fue en el gobierno de Felipe Calderón cuando se adjudicaron contratos, sin concurso de por medio, para el desarrollo de complejos penitenciarios. En total, se crearon ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) para ser construidos en varias entidades del país por constructoras sin experiencia en el ramo de la seguridad. En adición, fueron creadas dos prisiones de alta seguridad en la Ciudad de México, ubicadas en las inmediaciones del Reclusorio Norte. Sobre estas prisiones privadas, desde noviembre de 2020, Amlo señaló con preocupación la creación de estos centros penitenciarios cuya adjudicación fue directa y abusiva, generando una erogación, por recluso, mucho mayor que en los penales construidos exclusivamente con presupuesto público. En adición, los contratos se otorgaron con discrecionalidad y fueron clasificados como información reservada por un periodo de doce años (Documenta A. C., 2016; Espejel & Díaz, 2020; Espejel Espinoza & Díaz Sandoval, 2015). Sin duda, un cambio importante en la administración de Amlo es la revisión de los contratos, así como su posible cancelación. Se trata de una transformación importante, no solo en las políticas de seguridad, sino en el papel preocupante que ha adquirido el mercado en la procuración de justicia (Garduño & Urrutia, 2021).

Lo discutido hasta estas líneas nos permite reflexionar en torno a algunos posibles cambios y continuidades en la privatización de funciones estatales bajo el gobierno de izquierda de Amlo. En cuanto a las continuidades, la utilización de las APPS será ineludible, debido a que se ha convertido en el esquema prioritario para la creación de bienes y servicios públicos en prácticamente todos los rincones del planeta, sin importar preferencia ideológica de los gobiernos. No obstante, con esta primera aproximación en torno a las APPS en el gobierno de Amlo, es posible identificar algunas variaciones en su utilización. Por ejemplo, aunque el sector energético no escapa a las APPS, estas son empleadas particularmente para la construcción de infraestructura. Por otro lado, las grandes obras en materia de comunicaciones y transportes se valdrán de este esquema, como ocurrió en gobiernos previos. No obstante, un cambio es el manejo y control de los recursos públicos, en coherencia con el discurso anticorrupción del presidente, a fin de evitar sobrecostos en las obras. Habría que revisar si, en efecto, los proyectos se están construyendo sin riesgos y corrupción, siendo ambos problemas una constante en la obra pública en México. En adición, y hasta el momento, en áreas como la salud y la seguridad –sin olvidar la educación– las APPS han sido descartadas.

Conclusiones

La complejidad en las sociedades actuales ha involucrado una profunda transformación de las funciones estatales en prácticamente todos los rincones del planeta. Algunos de estos cambios han sido la reestructuración económica y política que ha creado las condiciones para la participación del mercado en tareas que eran exclusivas del Estado. La privatización de bienes y servicios públicos forma parte de dicha reestructuración, siendo un tema me-

dular en las ciencias sociales. Al respecto, desde la ciencia política y, particularmente, desde la economía política ha existido un interés por comprender y explicar las variaciones en los procesos de privatización e identificar el rol que juegan distintos actores, como por ejemplo los partidos políticos, en las concesiones de bienes públicos a favor del sector privado.

Desde la perspectiva ideacional, impulsada con vigor desde el institucionalismo histórico, los sistemas de creencias, ideas, paradigmas de política y discursos –configurados a lo largo de trayectorias individuales y colectivas– permiten analizar las variaciones en la política económica y, para el tema de interés de este artículo, su posible influencia en los procesos de privatización y estatización. En este sentido, aunque de manera tardía, el giro a la izquierda en países como México es un momento histórico que permite dar cuenta de las transformaciones y continuidades del aparato estatal. Por tanto, el triunfo de Amlo, cuyo liderazgo se ha opuesto de manera férrea a las privatizaciones, específicamente en el sector energético, es un evento que da la oportunidad de conocer las fracturas en la política de infraestructura, específicamente en aquella que intervienen actores del mercado como son las APPS.

No solo es el discurso antiprivatización de Amlo un elemento llamativo en el estudio de los cambios y continuidades en las APPS; también es el contexto político en el que Morena, el partido del presidente, controla ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Esta situación le ha permitido a Amlo impulsar su proyecto de Estado, así como inducir transformaciones en la privatización de bienes y servicios públicos. Aunque sus proyectos distan de ser antineoliberales, identificamos cambios relevantes como son las posibles cancelaciones de contratos de funciones desempeñadas por el capital privado, específicamente en el sector penitenciario. Sin embargo, la privatización de funciones estatales es un fantasma que recorre el mundo, y al que Amlo se ha opuesto a lo largo de su trayectoria política, no siempre con éxito.

Referencias

- Aguilar, G. (1996a, junio 15). Es complicada la privatización. *Reforma*. <<https://busquedas.guporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx>>.
- _____. (1996b, julio 2). Definen compra de petroquímica. *Reforma*.
- Amlo (2020). Lic. Andrés Manuel López Obrador. <<https://lopezobrador.org.mx/semblanza/>>.
- Arditi, B. (2009). El giro a la izquierda en América Latina: ¿una política post-liberal? *Ciencias Sociales Unisinos*, 45(3), 232-246. <<https://doi.org/10.4013/csu.2009.45.3.06>>.
- Aziz, A. & Alonso, J. (2009). *México: una democracia vulnerada*. México: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa.
- Babb, S. (2003). *Proyecto México: los economistas del nacionalismo al neoliberalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____. (2005). Del nacionalismo al neoliberalismo: el ascenso de los nuevos Money Doctors en México. *Políticas de economía, Ambiente y Sociedad en Tiempos de Globalización* (abril),

- 155-172. <https://www.researchgate.net/publication/228352303_Del_nacionalismo_al_neoliberalismo_El_ascenso_de_los_nuevos_Money_Doctors_en_Mexico>.
- Banobras (2020). *Contratos para el Diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación del Tren Maya*. México. <https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/tren-maya/>.
- Bautista, J. (1995). México: ¿liberalismo social o neoliberalismo? *Problemas del Desarrollo*, 26(103), 185-208.
- BBC News Mundo (2018, octubre 29). Santa Lucía: en qué consiste el proyecto de Amló para construir un nuevo aeropuerto para Ciudad de México. *BBC*. <<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46015693>>.
- Beck, U. (2006). The Cosmopolitan State: Redefining Power in the Global Age. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 18(34), 143-159.
- Bolívar, R. (2013). El lopezobradorismo: la construcción de un movimiento social y político. *El Cotidiano*, 178(marzo-abril), 81-82.
- _____. (2020). La izquierda nacionalista: el Movimiento Regeneración Nacional. En J. Cadena-Roa & M. A. López Leyva (eds.). *Las izquierdas mexicanas hoy. Las vertientes de la izquierda*. México: IIS, CENICH, Unam, Ficticia, 275-304.
- Ceballos, G. (2020). La pandemia, la fauna silvestre y el futuro de la humanidad. Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia. <<https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?p=84711&fbclid=IwAR2u1qOieF3Xy2rj8NnTvps1ysUFPSzvW7b-5CuyanSb43EkftSelw7zqvbc>>.
- Ceceña, A.E. & Veiga, J.G. (2019). *Avances de investigación. TREN MAYA*. Ciudad Universitaria. <<http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2019-12/OLAG-2019-TrenMaya-Avancesdeinvestigacion.pdf?fbclid=IwAR2woe6RkBm5vF-tfgpj5ufemHeAAAE5ittJzTK0fPftubTcGuDzTVzlvoqo>>.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2007). *Programa de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas a 2007*. México. <<http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0162007.pdf>>.
- _____. (2019). *Evolución del Gasto de Inversión Pública en México 2010-2019*. México. <<https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0192019.pdf>>.
- CONAFOR (2020). *Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 mediante el método de muestreo*. México. <<http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/1/7768Documento tecnico 2020 Deforestacion Bruta Final.pdf>>.
- Cota, I. (2021, febrero 2). La iniciativa energética de López Obrador margina a las renovables en favor de la CFE. *El País*. <<https://elpais.com/mexico/2021-02-02/la-iniciativa-energetica-de-lopez-obrador-margina-a-las-renovables-en-favor-de-la-cfe.html>>.
- De Haldevang, M. & Stillman, A. (2020, diciembre 11). Política energética de Amló deja «en el limbo» a 200 proyectos privados. *El Financiero*. <<https://www.elfinanciero.com.mx/economia/politica-energetica-de-amlo-deja-en-el-limbo-a-200-proyectos-privados>>.

- De la Rosa, A. (2020, diciembre 15). Aeropuerto de Santa Lucía lleva avance físico de 43.6% a noviembre. *El Economista*. <<https://www.economista.com.mx/empresas/Aeropuerto-de-Santa-Lucia-lleva-avance-fisico-de-43.6-a-noviembre-20201215-0011.html>>.
- Díaz, M. (2019). El triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El cambio en las estrategias en materia de seguridad y la reconfiguración estatal. *Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad*, (89), 59-80. <<https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1054>>.
- _____. (2011a). *Las disputas discursivas a favor de la democracia en los órganos autónomos: un análisis del Banco de México y del Instituto Federal Electoral*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. <<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/3334?show=full>>.
- _____. (2011b). *Las disputas discursivas a favor de la democracia en los órganos autónomos: un análisis del Banco de México y del Instituto Federal Electoral*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. <<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3334>>.
- _____. (2020, agosto 6). Covid-19 y la coexistencia con la vida silvestre: un debate necesario. *Blog Latin American Perspectives*. <<https://latinamericanperspectives.com/covid-19-y-la-coexistencia-con-la-vida-silvestre-un-debate-necesario/>>.
- Díaz, M. & Espejel Espinoza, A. (2020). Aprendizaje y transformación: un análisis de las estrategias electorales de Andrés Manuel López Obrador a partir del Enfoque Estratégico-Relaciona. En M. A. Hernández García, A. Muñoz Armenta & G. R. Gómez Romo de Vivar (eds.). *El triunfo de la izquierda en las elecciones de 2018. ¿Ideología y pragmatismo?* Universidad de Guanajuato y Grañén Porrúa, 139-172. <<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/109039/El-triunfo-de-la-izquierda-en-las-elecciones-de-2018-Ideologia-o-pragmatismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.
- Documenta A.C. (2016). *Privatización del Sistema Penitenciario en México*. <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedrssa/lix/pesacu_invmex.pdf#page=172>.
- Ducatenzeiler, G. & Oxhorn, P. (2012). Democracia, autoritarismo y el problema de la gobernabilidad en América Latina. *Desarrollo Económico*, 34(133), 31-52. <<https://www.jstor.org/stable/3467229>>.
- El Economista (2019, diciembre 16). En la consulta sobre el Tren Maya, 92.3% votó por el «Sí» y 7.4% por el «No». *El Economista*. <https://www.economista.com.mx/politica/En-la-consulta-sobre-el-Tren-Maya-92.3-voto-por-el-Si-y-7.4-por-el-No-20191216-0034.html>.
- _____. (2020, octubre 5). Amlo anuncia plan de inversión con la IP para impulsar 39 proyectos de infraestructura. *El Economista*. <<https://www.economista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-plan-de-inversion-con-la-IP-para-impulsar-39-proyectos-de-infraestructura-20201005-0018.html>>.
- El País (1990, mayo 2). El presidente mexicano anuncia por sorpresa la privatización de la banca. *El País*. <https://elpais.com/diario/1990/05/03/economia/641685606_850215.html>.

- El Universal (2020, agosto 26). No estamos contra los empresarios sino contra la corrupción y riqueza mal habida: Amlo. *El Universal*. <<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-no-estamos-contra-los-empresarios-sino-contra-la-corrupcion>>.
- Energía a Debate (2020, agosto 4). Marca Amlo política energética por memorándum. *Energía a Debate*. <<https://www.energiaadebate.com/regulacion/marca-amlo-politica-energetica-por-memorandum/>>.
- Esch, F. Van (2015). *Measuring the Ideational Turn in Political Science. Introducing Cognitive Mapping as a Method for the Study of Ideas*. <<https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/cb24d6f1-a073-45c4-a206-7162830b9d05.pdf>>.
- Espejel, A. & Díaz, M. (2020). ¿Privatización del sistema penitenciario en México? Un balance en torno a las prisiones construidas bajo el esquema de asociaciones público-privadas. En C. Jasso, Lucía & M. Pierre (eds.). *Transformación del Estado y privatización de la seguridad pública. Policías privadas, cárceles privadas y gated communities en México*. México: IIS-Unam, 125-165. <http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/2/transformacion_del_estado.pdf>.
- Espejel Espinoza, A. & Díaz Sandoval, M. (2015). De violencia y privatizaciones en México: el caso de las asociaciones público-privadas en el sector penitenciario. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, 4(1), 129-158. <<http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/111/101>>.
- _____ (2018). La democratización nacional y su influencia en las transformaciones electorales y partidistas en el Estado de México (1990-2017). En A. Muñoz Armenta (ed.). *Historia de los partidos políticos en el Estado de México (1913-2017)* (pp. 199-254). Toluca: Instituto Electoral del Estado de México. <https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/109/10/076b1c18f3f8d81fd2dace5b6ecd66.pdf>.
- Farha, L., Bohoslavsky, J.P., Boly, K., De Schutter, O. & Sepúlveda, M. (2020, octubre 19). Covid-19 has Exposed the Catastrophic Impact of privatising Vital Services. *The Guardian*. <<https://www.theguardian.com/society/2020/oct/19/covid-19-exposed-catastrophic-impact-privatising-vital-services>>.
- Forbes Staff (2018, octubre 29). Así fueron las reacciones a la cancelación del NAIM en Texcoco. *Forbes*. <<https://www.forbes.com.mx/asi-fueron-las-reacciones-a-la-cancelacion-del-naim-en-texcoco/>>.
- _____ (2019, mayo 29). Inservibles, 50% de los hospitales donde invirtió el gobierno de Peña Nieto. *Forbes México*. <<https://www.forbes.com.mx/inservibles-50-de-los-hospitales-donde-invirtio-el-gobierno-de-pena-nieto/>>.
- _____ (2020, agosto 18). Amlo critica concesión a 100 años del puerto de Veracruz; buscará revocarla. *Forbes México*. <<https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-revocar-concesion-puerto-de-veracruz/>>.
- Garduño, R. & Urrutia, A. (2021, enero 13). Anuncia Amlo que eliminará concesiones de cárceles a privados. *La Jornada*. <<https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/anuncia-amlo-que-eliminara-concesiones-de-carceles-a-privados/>>.

- Gobierno de México (2019a). *Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado*. México. <<https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Acuerdo-Nacional-de-Inversión-en-Infraestructura.pdf>>.
- ____ (2019b). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*. México. <<https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf>>.
- ____ (2019c). *Presidente López Obrador declara formalmente fin del modelo neoliberal y su política económica*. México. <<https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-declara-formalmente-fin-del-modelo-neoliberal-y-su-politica-economica-lo-que-hagamos-sera-inspiracion-para-otros-pueblos>>.
- Guerrero, O. (2004). El mito del nuevo «Management» público. *Revista Venezolana de Gerencia*, 9(25), 9-52.
- Hall, P.A. & Taylor, R.C.R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936-957. <<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>>.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal. <<https://doi.org/10.5565/rev/qp.110>>.
- Hewitt, C. (2018). Neoliberalismo, política macroeconómica y el futuro del campo. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 35(70), 7-27.
- Inegi (2017). *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental*. México: Inegi.
- ____ (2018). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública*. México: Inegi.
- L., C.J. & Pedersen, O.K. (2001). The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis. En *The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis*, vol. 11, 1155-1167. Pinceton. <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11516946>[https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960-9822\(01\)00369-4](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960-9822(01)00369-4)<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982201003694><https://ac.els-cdn.com/S0960982201003694/1-s2.0-S0960982201003694-mai>>.
- López, I. (2021, febrero 1). Amlo envía reforma eléctrica: prioriza a CFE y cambia contratos. *Forbes México*. <<https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-reforma-electrica-prioriza-cfe-cambia-contratos/>>.
- López Obrador, A.M. (1999). *Fobaproa, expediente abierto*. México: Grijalbo.
- ____ (2019, julio 1). Discurso completo de López Obrador en el Zócalo, a un año de su triunfo electoral. *Animal Político*. <<https://www.animalpolitico.com/2019/07/amlo-discurso-completo-zocalo-informe/>>.
- ____ (2020, noviembre 30). Presidente presenta segundo paquete de proyectos de infraestructura con inversión pública y privada. *Amlo*. <<https://lopezobrador.org.mx/2020/11/30/presidente-presenta-segundo-paquete-de-proyectos-de-infraestructura-con-inversion-publica-y-privada/>>.
- Luhmann, N. (1996). La contingencia como atributo de la sociedad moderna. En A. Giddens, Z. Bauman, N. Luhmann, U. Beck & J. Beriaín (eds.), *Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo*. España: Anthropos.

- Marí, C. (1995, abril 20). Inician perredistas marcha a México. *Reforma*.
- Martínez, F. (2020, diciembre 18). Amlo blindará al Tren Maya contra la privatización. *La Jornada*. <<https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/18/amlo-blindara-al-tren-maya-contra-la-privatizacion-639.html>>.
- Mendoza, E. (2012a, enero 8). Asociaciones público-privadas: nueva oleada de privatizaciones. *Contralínea*. <<https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2012/01/08/asociaciones-publico-privadas-nueva-oleada-de-privatizaciones/>>.
- _____. (2012b, enero 18). Asociaciones público-privadas en 84 por ciento del territorio nacional. *Contralínea*. <<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/18/asociaciones-publico-privadas-en-84-por-ciento-del-territorio-nacional/>>.
- Mentado, P. (2020, enero 10). En febrero se presenta plan de inversión público-privada de Pemex y CFE: Amlo. *Energía Hoy*. <<https://energiahoy.com/2020/01/10/en-febrero-se-presenta-plan-de-inversion-publico-privada-de-pemex-y-cfe-amlo/>>.
- Mitofsky (2018). *México: Encuestas de salida. 4 elecciones presidenciales. 2000-2018*. México: Mitofsky.
- Navarrete, J.P. & Rosiles, J. (2019). El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. *Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad*, 89, 177-201. <<https://argumentosojs.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1059>>.
- Navarro, M.F. (2020, marzo 3). Romo defiende a su exempresa, hoy acusada de acaparar concesiones de agua. *Forbes México*. <<https://www.forbes.com.mx/romo-defiende-su-exempresa-hoy-acusada-de-acaparar-concesiones-de-agua/>>.
- Oficina de Evaluación y Supervisión (2017). *Evaluación de Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura*. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo. <<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluación-de-asociaciones-público-privadas-en-infraestructura.pdf>>.
- ONU (2019). *El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia: ONU-DH*. Recuperado de organización de las Naciones Unidas.
- Oropeza, D. (2019, septiembre 11). Comunidades indígenas hacen bloque contra proyecto transistmico. *Pie de Página*. <<https://www.blim.com/asset/70036/player>>.
- Posada, M. (2018, abril 17). Slim advierte a Amlo: cancelar el nuevo aeropuerto, freno al desarrollo. *La Jornada*. <<https://www.jornada.com.mx/2018/04/17/politica/003n1pol>>.
- Presidencia de la República (2020). Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. <<https://www.gob.mx/presidencia/estructuras/andres-manuel-lopez-obrador>>.
- Quintana, E. (1996, marzo 22). ¿El petróleo es nuestro? *Reforma*.
- Rangel, J.J. (2018, septiembre 10). Del tren Transpeninsular al Maya. *Milenio*. <<https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/del-tren-transpeninsular-al-maya>>.
- Reforma Staff (2018a, marzo 21). Alertan pérdidas sin NAIM. *Reforma*.
- _____. (2018b, diciembre 21). Entierran el NAIM. *Reforma*.

- Rousseau, I. (1995). *Modernidad con pies de barro: 1988-1994*. México: Centro de estudios Mexicanos y Centroamericanos.
- Sacristán, E. (2006). Las privatizaciones en México. *Economía Unam*, 3(9).
- Sánchez, E. (2018, julio 4). Morena es mayoría en 19 de 26 Congresos locales. *El Universal*. <<http://www.eluniversal.com.mx/estados/mayoria-de-morena-en-19-de-26-congresos-locales>>.
- Schamis, H.E. (1999). Distributional Coalitions and the Politics of Economic Reform in Latin America. *World Politics*, 51(2), 236-268.
- Schmidt, V.A. (2010). Taking Ideas and discourse Seriously: Explaining change Through Discursive Institutionalism as the fourth 'New Institutionalism'. *European Political Science Review*, 2(1), 1-25. <<https://doi.org/10.1017/S175577390999021X>>.
- Schneider, V. & Jäger, A. (2003). *The Privatization of Infrastructures in the Theory of the State: an Empirical Overview and a Discussion of Competing Theoretical Explanations*. Francia. <<https://ecpr.eu/Filestore/paperproposal/2219ecf5-6c84-4f43-854a-2f852b27611d.pdf>>.
- SCT (2019). *Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco*. México. <<https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco>>.
- Sin Embargo (2012, mayo 14). Otro «compromiso cumplido» de Peña Nieto: un hospital «ni público ni privado» que endeudará Edomex 25 años. *Sin Embargo*. <<https://www.sinembargo.mx/14-05-2012/232681>>.
- Strange, S. (1995). The Limits of Politics. *Government and Opposition*, 30(3), 291-311. <<https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1995.tb00129.x>>.
- Suárez, L., Pratesi, I., Galaverni, M., Antonelli, M., Asunción, M., & Rivera, L. (2020). *Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la salud de la humanidad*. España. <https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/naturaleza_y_pandemias_wwf.pdf>.
- Zohnhöfer, R., Obinger, H. & Wolf, F. (2008). Partisan Politics, Globalization, and the Determinants of Privatization Proceedrecuperados in Advanced Democracies (1990-2000). *Governance*, 21(1), 95-121.

Este libro se compuso con la tipografía Caslon Pro 10:12. Se terminó de imprimir, en plena pandemia, en junio de 2021, en los talleres de Ediciones del Lirio S.A. de C.V., ubicados en Azucenas 10, San Juan Xalpa, Iztapalapa, Ciudad de México. C.P. 09850. El tiraje consta de *** ejemplares.